Inauguración del diálogo con las FARC en Oslo, Noruega, octubre de 2012.

# Poner fin a 50 años de conflicto:

## *Los desafíos pendientes y el papel de Estados Unidos en Colombia*

Por Adam Isacson

WOLA

LA OFICINA EN WASHINGTON PARA ASUNTOS LATINOAMERICANOS

ABRIL 2014

El próximo mayo, el mayor grupo guerrillero de Colombia, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), cumplirá 50 años. El conflicto en el tercer país más poblado de América Latina es el más antiguo de todos los conflictos armados que se cobran un mil o más vidas cada año alrededor del mundo.

En 2012, el gobierno colombiano y las FARC dieron inicio a la cuarta ronda de negociaciones para poner fin al conflicto. Esta vez, el diálogo está comenzando a dar resultado: los negociadores en La Habana, Cuba, han llegado mucho más lejos que nunca antes. No sería irrazonable esperar que se llegue a un acuerdo hacia el fin de 2014.

La agenda de las negociaciones de La Habana abarca cinco temas sustantivos o reformas políticas, además de una discusión sobre cómo aplicar lo acordado. A abril de 2014, tras 21 rondas de diálogo de 10 días cada una, los negociadores han llegado a acuerdos sobre dos de estos temas sustantivos, y están próximos a un acuerdo sobre el tercero.

## I. La participación de EE.UU. será importante

Al igual que todos los procesos de paz, el éxito de las negociaciones de paz en Colombia dependerá del apoyo internacional, tanto político como económico. El actor internacional más importante será Estados Unidos, que a lo largo de los últimos 15 años ha sido la principal fuente de ayuda externa (US$9.000 millones desde el 2000). Gran parte de esta ayuda ha estado destinada a las fuerzas de seguridad colombianas. La ayuda de Estados Unidos ha contribuido directa e indirectamente al conflicto armado. A Estados Unidos le interesa de sobremanera apoyar del mismo modo el esfuerzo de Colombia por lograr la paz, tanto durante el proceso de negociaciones como, especialmente si el diálogo es exitoso, cuando el país atraviese la compleja etapa de transición al posconflicto.

### El estado de las negociaciones con las FARC (a abril de 2014)

La agenda de los negociadores incluye cinco temas sustantivos y una cuestión operativa:

- **POLÍTICA INTEGRAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA** (tenencia de la tierra y desarrollo rural)
- **PARTICIPACIÓN POLÍTICA** (garantías para la oposición política, incluidos los ex-guerrilleros)
- **EL FIN DEL CONFLICTO** (justicia transicional, desarme, desmovilización y reinserción)
- **SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE LAS DROGAS ILÍCITAS** (política antidroga; actualmente en debate)
- **VÍCTIMAS** (víctimas del conflicto)
- **IMPLEMENTACIÓN, VERIFICACIÓN Y RATIFICACIÓN** (cómo consolidar en la legislación los compromisos de los acuerdos de paz, y después gestionar su cumplimiento)

### Cómo un acuerdo de paz en Colombia favorecería los intereses de Estados Unidos

- El peor conflicto armado del hemisferio llegaría a su fin, en menos años de los que llevaría una eventual derrota en el campo de batalla, lo cual mejoraría la seguridad regional.
- Ofrecería una oportunidad para reducir la producción de cultivos ilícitos.
- Dejaría de existir uno de los grupos que integran la lista de organizaciones terroristas de Estados Unidos, y miles de sus miembros pasarían a la legalidad.
- Crearía una oportunidad para mejorar la gobernabilidad de territorios históricamente sin ley, que han dado cobijo a grupos terroristas y traficantes.
- Ofrecería una oportunidad para mejorar la cohesión regional al promover la cooperación entre Estados Unidos y países latinoamericanos cuya relación con Washington ha sido difícil en los últimos tiempos, en un proyecto común de apoyo al proceso.

### APOYO DIPLOMÁTICO

Mientras continúan las negociaciones, el gobierno de Estados Unidos puede ayudar a mantener en marcha el proceso realizando frecuentes manifestaciones públicas de su apoyo político a la búsqueda de la paz a través del diálogo del presidente colombiano Juan Manuel Santos. Diversos funcionarios de alto nivel, entre ellos el presidente Barack Obama y el vicepresidente Joe Biden, han expresado a menudo su apoyo al diálogo. En promedio, han hecho una declaración pública cada dos o tres meses.

Estas declaraciones públicas deberían hacerse con más frecuencia. Contribuyen al diálogo gracias a su impacto dentro de Colombia. Entre los más férreos opositores a las negociaciones de paz en Colombia se incluyen personajes influyentes como el ex-presidente Álvaro Uribe, a quien muchos colombianos consideran muy cercano al gobierno de Estados Unidos. (En enero de 2009, el presidente George W. Bush condecoró a Uribe con la Medalla Presidencial de la Libertad.) Al expresar su apoyo por la iniciativa de paz del presidente Santos, el gobierno de Obama deja en claro que no está del lado de aquellos que se oponen a las negociaciones.

Aumentar la frecuencia de las expresiones de apoyo es una medida política que conlleva muy bajo costo político y ningún costo financiero. Tras 15 años de ayuda de Estados Unidos a las fuerzas de seguridad colombianas, en Washington parece haber un amplio consenso a favor de las negociaciones y en contra de seguir la lucha armada. Si bien algunos de los senadores y representantes de la línea más dura del partido Republicano han expresado reservas, lo han hecho solo en raras ocasiones, y en general en términos bastante moderados.

**Cómo puede Estados Unidos apoyar la paz en Colombia**

- Manifestando a menudo su apoyo al proceso desde las más altas esferas.
- Accediendo si el gobierno colombiano solicita que Estados Unidos tome cualquier acción en ayuda del proceso.
- Mostrando flexibilidad si los acuerdos —en particular el acuerdo sobre política antidroga— requieren que Estados Unidos modifique su estrategia o sus planes de ayuda a Colombia.
- En los primeros años de la fase posconflicto, manteniendo, o incluso aumentando, los generosos niveles de ayuda que Estados Unidos ha otorgado a Colombia desde el 2000. Reorientando la ayuda de las fuerzas armadas y policiales al cumplimiento de los acuerdos de paz y el fortalecimiento de las instituciones civiles.
- Liderando la gestión de la articulación entre donantes internacionales, a fin de garantizar que se cubra la máxima gama de necesidades al tiempo que se reduce al mínimo la duplicación de esfuerzos.
- Aprovechando los profundos vínculos entre Estados Unidos y las fuerzas armadas colombianas para ayudar a la institución militar a transitar sin demasiadas complicaciones en lo que podría ser una dolorosa transición posconflicto.

## FLEXIBILIDAD EN LA POLÍTICA ANTIDROGA

Uno de los motivos de este consenso es la agenda de los negociadores, que incluye muy pocos elementos que puedan amenazar los intereses de Estados Unidos. La posible excepción es un tema que los negociadores comenzaron a debatir a fines de 2013, y que seguían debatiendo al momento de publicar este informe, en abril de 2014: la política antidroga.

En los últimos 30 años, Estados Unidos se ha esforzado por reducir el volumen de droga que sale de Colombia —principalmente cocaína— mediante la erradicación forzada de los cultivos de coca, operaciones militares y policiales de interdicción y la captura y posterior extradición de traficantes. Cabe la posibilidad de que el gobierno de Santos y las FARC acuerden algunos cambios en la política antidroga que obliguen a los Estados Unidos a modificar su propia estrategia y planes de ayuda. Si eso sucediera, Estados

El vicepresidente Joe Biden visita Bogotá, mayo de 2013.

*FIGURA 1: Cultivo de coca, fumigación aérea y erradicación manual en Colombia*

Fuente: Departamento de Estado de los Estados Unidos, International Narcotics Control Strategy Reports <http://1.usa.gov/1eAAutY>

Unidos no deberá responder con rigidez. El apoyo a la paz requerirá flexibilidad.

Será especialmente necesario ser flexibles si los negociadores colombianos acuerdan eliminar un programa en el que Estados Unidos ha invertido miles de millones de dólares desde principios de los 90: la erradicación de la coca, la planta utilizada para producir cocaína, mediante la fumigación aérea. Bajo este programa se han fumigado más de tres millones de acres de territorio colombiano en los últimos 15 años, y las FARC exigen que se le ponga fin.

Las organizaciones de la sociedad civil colombiana se hacen eco de esta exigencia, señalando la crueldad de rociar veneno sobre los pequeños agricultores en lugar de ofrecerles una presencia real del estado, y argumentando que la fumigación es nociva para el medioambiente y la salud de las personas. Los detractores de la política antidroga añaden que el programa de fumigación es ineficaz, ya que conduce a la dispersión del cultivo de coca sin lograr una reducción significativa a nivel nacional. La reducción en el cultivo de coca que experimentó Colombia a partir de 2007, señalan, se dio tras los recortes al programa de fumigación en 2006. Estos argumentos deberían permitir a los Estados Unidos eliminar el programa de fumigación sin demasiados problemas, si así lo requirieran los acuerdos de paz. Aún así, adecuarse a este cambio posiblemente exija flexibilidad por parte de funcionarios y agencias que aún ven la fumigación como una herramienta eficaz para la reducción de la oferta.

Otro de los temas que probablemente surjan en el acuerdo sobre política antidroga es la extradición. Casi todos los jefes importantes de las FARC son buscados por tribunales o fiscales estadounidenses, acusados de narcotráfico. El poder ejecutivo estadounidense no tiene ningún poder para retirar estos pedidos de extradición. Sin embargo, los jefes de las FARC no se van a desmovilizar si no tienen garantías de que el gobierno colombiano no los va a extraditar a Estados Unidos, al menos siempre y cuando cumplan con los compromisos acordados en el proceso de paz.

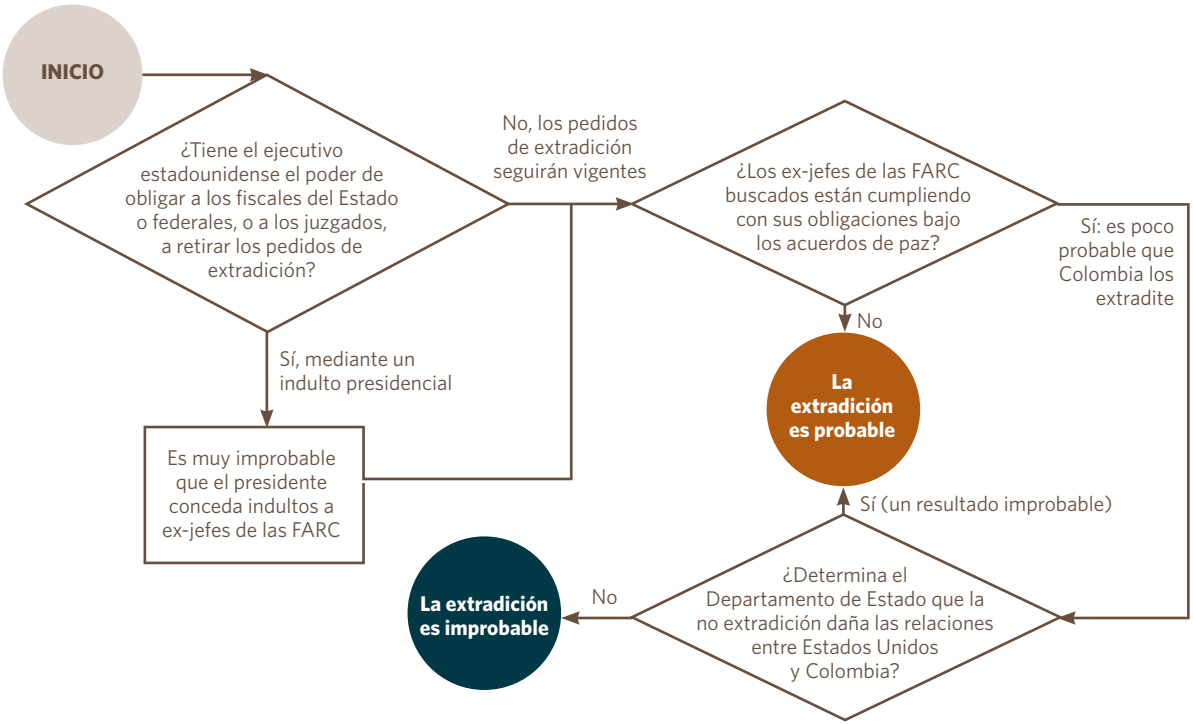
Si Colombia no responde a los pedidos de extradición de jefes de las FARC, el presidente estadounidense y el Departamento de Estado tendrán que decidir si esto tiene algún efecto en las relaciones entre Estados Unidos y Colombia. Lo más probable es que la negativa a extraditarlos no tenga ningún impacto en las relaciones bilaterales. No obstante, los pedidos de extradición del poder judicial estadounidense seguirán vigentes, y pesarán siempre sobre la situación posconflicto en Colombia.

Más allá de la política antidroga, las negociaciones con las FARC instan a los Estados Unidos a mostrar una nueva flexibilidad en su política hacia Cuba. Si

*"El Departamento de Estado de los Estados Unidos ha admitido que Cuba ya no apoya el terrorismo ni la insurgencia armada; ha agradecido a Cuba su ayuda en la liberación de un ciudadano estadounidense en Colombia; y ha elogiado las negociaciones de paz entre Colombia y las FARC, patrocinadas por Cuba. Mientras, ha seguido designando a Cuba como un Estado Patrocinador del Terrorismo."*

*— Ana Goerdt, Oficial de Programas para Cuba de WOLA, octubre de 2013*

## FIGURA 2: Cómo se podrían manejar los pedidos de extradición




La cuestión clave es si la negativa a cumplir con los pedidos de extradición tendría algún impacto en las relaciones entre Estados Unidos y Colombia. En el pasado no ha sido así. En 2011, Colombia extraditó al narcotraficante venezolano Walid Makled a Venezuela, a pesar de que también era buscado por la justicia estadounidense. En 2009, la Corte Suprema de Colombia frenó la extradición de jefes militares que estuvieran participando en procesos de justicia transicional. Ninguno de estos casos afectó a las relaciones entre Estados Unidos y Colombia.

los negociadores en La Habana logran llegar a un acuerdo, el prudente rol del gobierno cubano como una de las dos "naciones garantes" del proceso (junto con Noruega) terminará con los pocos pretextos que le quedan a Washington para mantener a Cuba en su lista de estados que patrocinan el terrorismo, junto con Irán, Sudán y Siria. Cuba está trabajando para facilitar la desmovilización de la que, según la lista del Departamento de Estado, sería la principal organización terrorista extranjera del hemisferio occidental. El Departamento de Estado debería mostrar su apoyo a las negociaciones eliminando a Cuba de una lista a la que ya no pertenece.

La Habana, noviembre de 2013

## II. Lo que falta discutir

Es probable que las FARC y el gobierno lleguen a un acuerdo sobre política antidroga, pero las negociaciones de La Habana aún tendrán mucho camino por recorrer. Uno de los interrogantes es cómo ratificar, u otorgar fuerza de ley, a un eventual acuerdo de paz. Las FARC quieren que se celebre una asamblea nacional constituyente para modificar la constitución del país, mientras que el gobierno prefiere dejar que los votantes aprueben los acuerdos de paz mediante un referéndum. Está previsto discutir esta cuestión operativa hacia el final de las negociaciones de paz, como parte del último punto de la agenda. Antes, será necesario hacer frente a dos cuestiones aún más espinosas: cómo atender a las víctimas del conflicto, y cómo llevar ante la justicia a los responsables de crímenes de lesa humanidad.

### LAS VÍCTIMAS

Las FARC son responsables de miles de asesinatos de no combatientes, secuestros, desplazamientos forzados, víctimas de minas terrestres, niños soldado y otras acciones que han dejado atrás un sinfín de víctimas. Los jefes del grupo y los negociadores parecen negarse a asumir este hecho. Sus declaraciones a menudo parecen transmitir el mensaje de que "nosotros también somos víctimas". Tan solo en los últimos meses han comenzado los negociadores de las FARC a sugerir en sus entrevistas con periodistas la necesidad de ofrecer reparaciones y devolver la dignidad a las víctimas.

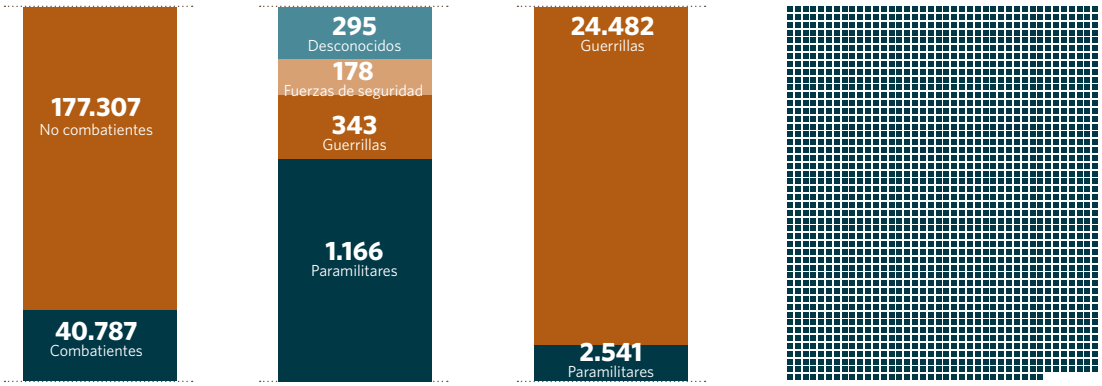
Numerosos observadores han señalado que tan pronto como las FARC den muestras públicas de humildad y pidan perdón a sus víctimas, el proceso de paz habrá cruzado un umbral clave, tras el cual estará prácticamente asegurado el éxito del acuerdo. Los negociadores de las FARC dicen que podrían estar dispuestos a hacer ese tipo de declaración, pero solo cuando llegue el momento de abordar ese punto en la agenda de las negociaciones de paz. "Yo no tengo la fórmula", dijo el negociador de las FARC Pablo Catatumbo al diario colombiano El Espectador en noviembre de 2013. "Ese es un tema que vamos a abordar en la mesa en su debido momento. Lo único que le quiero decir es que nosotros no somos ni insensibles ni cínicos frente a eso."

Las FARC no son los únicos que deben mostrar más arrepentimiento. Los jefes de las FARC señalan con acierto que otros grupos armados han causado numerosas víctimas, superando incluso su propio saldo nefasto. Entre las guerrillas, paramilitares y las fuerzas de seguridad del estado, más de seis millones de colombianos —de un total de 47 millones— han perdido a seres queridos; han sido secuestrados, mutilados, torturados o desplazados; o de algún otro modo han sufrido directamente las consecuencias del conflicto.

Como parte del esfuerzo por restituir a las víctimas se debe crear una comisión de la verdad, un mecanismo previsto en una enmienda constitucional, el Marco Jurídico para la Paz, que Colombia aprobó en 2012. El mandato de esta comisión debe incluir crímenes cometidos por todas las partes, y debe contar con suficiente autonomía, presupuesto, protección y tiempo para llevar a cabo su trabajo.

## *FIGURA 3: El largo conflicto de Colombia*

**Estadísticas del Centro de Memoria Histórica del gobierno colombiano. (www.centrodememoriahistorica.gov.co)**




**218.094** personas asesinadas entre 1958 y 2012, en su mayoría no combatientes

**11.751** personas asesinadas en **1.982** masacres entre 1985 y 2012, en su mayoría a manos de paramilitares

**27.023** personas secuestradas entre 1970 y 2010, en su mayoría por las guerrillas.

**5.712.506** personas víctimas del desplazamiento forzado entre 1985 y 2012. Un cuadrado ▪ equivale a unas 3.000 personas

## JUSTICIA TRANSICIONAL

En el pasado, algunos procesos de paz, tanto en Colombia como en otros países, no han aplicado ningún castigo, o solo castigos leves, incluso a los peores violadores de los derechos humanos. En El Salvador, Guatemala e Irlanda del Norte, se concedieron amnistías contra la persecución penal o excarcelaciones a cambio de la desmovilización de los grupos. En Sudáfrica, la amnistía fue concedida a cambio de confesar.

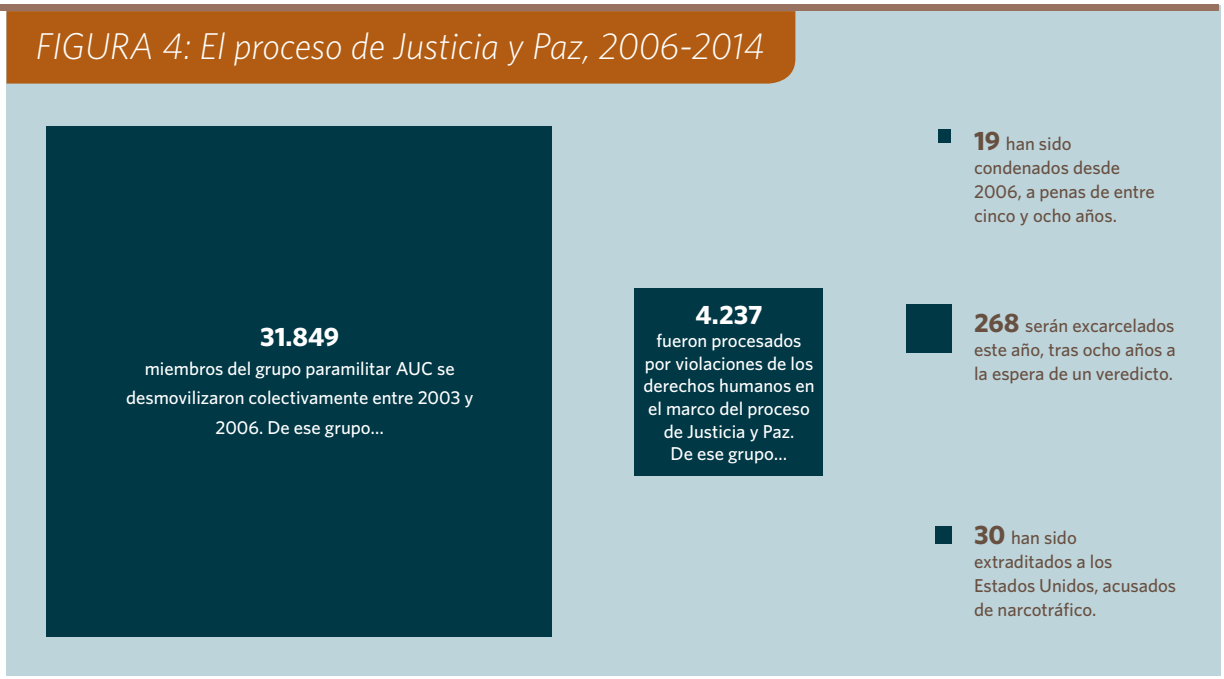
Hoy en día, sin embargo, las normas internacionales de derechos humanos han evolucionado, y los gobiernos ya no pueden alentar a los miembros de grupos armados a desmovilizarse ofreciéndoles a cambio la amnistía, al menos no a los responsables de los peores abusos. Colombia es signataria del Estatuto de Roma de 2002, que establece la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya, en los Países Bajos. Si esta corte determina que un país signatario no está castigando suficientemente a los responsables de crímenes de lesa humanidad, puede ordenar el arresto de dichos individuos y juzgarlos.

A mediados de la década del 2000, Colombia adoptó medidas de castigo alternativas cuando desmovilizó a los grupos paramilitares pro-gobierno. En 2005, la Ley de Justicia y Paz de Colombia exigió que los responsables de los peores abusos confesaran sus crímenes y recibieran sentencias de entre cinco y ocho años. Las confesiones revelaron la ubicación de miles de fosas comunes, proporcionaron pruebas que podrían ayudar a resolver miles de homicidios y ayudaron a iniciar el procesamiento de miles de políticos que habían forjado alianzas con la

### Qué necesita una Comisión de la Verdad fuerte

- **INDEPENDENCIA Y AUTONOMÍA.** Los comisionados y su equipo deberán ser seleccionados mediante un proceso transparente, según criterios claros. Una vez nombrados, deberá ser muy difícil despedirlos. Su seguridad y la de sus familias deberá estar totalmente protegida. Deberán poder manejar su presupuesto sin interferencias externas.
- **SUFICIENTE PRESUPUESTO Y PERSONAL.** La Comisión deberá contar con un amplio equipo de trabajo, tecnología y transporte. La verdad no será revelada con escasos recursos.
- **UN LARGO PLAZO.** Un mandato corto con plazos muy limitados es una forma encubierta de garantizar que la verdad permanezca oculta. La Comisión necesitará tiempo.
- **CONSULTA PERMANENTE CON LAS VÍCTIMAS.** La Comisión deberá consultar constantemente la opinión de los principales interesados: las asociaciones de víctimas de Colombia. Este proceso de consulta formal y periódica deberá incluir a las víctimas mujeres, indígenas y afrocolombianas.

*FIGURA 4: El proceso de Justicia y Paz, 2006-2014*




organización paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

No obstante, los esfuerzos por llevar adelante los procesamientos han dado escasos resultados. Tras ocho años, el número de paramilitares condenados es ínfimo, y muchos miembros de esos escuadrones de la muerte financiados por el narcotráfico podrían ser liberados próximamente, habiendo cumplido condena sin haber nunca completado el proceso judicial.

El actual proceso de paz en Colombia es uno de los primeros en involucrar a un país signatario del Estatuto de Roma, el cual prohibe las amnistías por crímenes de lesa humanidad. La fiscal de la CPI ya ha advertido a Colombia que sus negociadores en La Habana no deben acordar amnistías para los responsables de las peores violaciones de los derechos humanos. En julio de 2013, Fatou Bensouda escribió una carta en la que deja en claro que incluso si se llegara a un acuerdo para juzgar a los responsables, pero después se suspendieran las sentencias, esto no sería lo suficientemente estricto para impedir la intervención independiente de la Corte.

> "Llegué a la conclusión que una condena que sea grosera o manifiestamente inadecuada (...) invalidaría la autenticidad del proceso judicial nacional (...) La suspensión de penas iría en contra de la finalidad y propósito del Estatuto de Roma, debido a que impediría en la práctica el castigo de quienes han cometido los crímenes más graves".

Aún así, el presidente Santos no ha descartado formalmente la amnistía o la suspensión de las sentencias. Cuando, a principios de 2014, la ley de presupuesto aprobada por el Congreso de los Estados Unidos incluyó una disposición que congelaría una parte de la ayuda militar si Colombia concede amnistías a los responsables de abusos graves, en Colombia los partidarios de las negociaciones protestaron—aunque insistieron en que no habría ninguna amnistía.

Aparentemente, la enmienda constitucional del Marco Jurídico para la Paz de 2012 permitiría a Colombia aprobar una ley que suspendiera las sentencias, o al menos aplicar penas alternativas a la cárcel para los responsables de las peores violaciones, tanto de las FARC como de las fuerzas armadas. Si esto sucediera, Colombia podría verse enfrentada a la Corte Penal Internacional—a no ser que encuentre alguna forma de castigo que satisfaga a la CPI al tiempo que convence a los jefes de la guerrilla de que vale la pena desmovilizarse. Esto no será tarea fácil.

Puede que sea posible convencer a los guerrilleros desmovilizados de que paguen un precio por los crímenes de lesa humanidad que hayan cometido si los miembros de las fuerzas armadas y los civiles que hayan

### Qué hacer con los responsables de las peores violaciones

La justicia transicional es la más difícil de las tareas pendientes a las que se enfrentan los negociadores. En su seno encierra una cuestión problemática: si los estándares internacionales de derechos humanos prohíben conceder amnistías a los responsables de las violaciones más graves de los derechos humanos, y quizás incluso la suspensión de sentencias tras un juicio, entonces ¿qué tipo de pena de cárcel, o privación de libertad, puede imponer Colombia sin disuadir a las guerrillas de desmovilizarse?

Tras admitir su culpa, confesar y reparar a las víctimas, los ex-guerrilleros acusados de cometer crímenes de lesa humanidad podrían enfrentarse a uno de los siguientes castigos:

- **SENTENCIAS REDUCIDAS EN CÁRCELES COMUNES.** Esto es lo que se aplicó en Colombia a los jefes paramilitares pro-gobierno durante el proceso de Justicia y Paz a mediados de la década del 2000. Es poco probable que los jefes de las FARC acepten esto, aunque podría hacerse más admisible si Colombia aplicara el mismo procedimiento a miembros de las fuerzas de seguridad que hayan cometido graves violaciones de los derechos humanos, y a miembros de la élite económica colombiana que hayan planificado violaciones y patrocinado el paramilitarismo.
- **SENTENCIAS REDUCIDAS EN CENTROS ALTERNATIVOS.** Los jefes de las FARC acusados de cometer abusos graves podrían vivir en una zona, o zonas, en las que pudieran gozar de ciertas libertades —como recibir visitas, desarrollar su movimiento político, hablar con los medios y comunicarse por internet— pero de las cuales no podrían salir. (Un arreglo de este tipo fue la "Casa de Paz", en el norte de Medellín, en la cual cumplió condena el jefe del ELN Francisco Galán, y en la que podía recibir visitas y hacer de intermediario para facilitar un posible diálogo con los jefes del grupo. El perímetro de esta casa estaba permanentemente vigilado por la policía.) Esta opción podría resultar atractiva para los jefes de las FARC desmovilizados, quienes en los años posteriores a un acuerdo podrían necesitar un lugar seguro desde el cual construir un futuro movimiento político.
- **SENTENCIAS SUSPENDIDAS A CAMBIO DE CONFESIONES PLENAS Y REPARACIONES, JUNTO CON LA PROHIBICIÓN DE ACTIVIDAD POLÍTICA DURANTE UN NÚMERO DETERMINADO DE AÑOS.** No está claro si esta opción satisfaría a la Corte Penal Internacional, o a los jefes de las FARC con ambiciones políticas.

No obstante, se trata de una cuestión tan compleja, que los negociadores podrían finalmente optar por una fórmula totalmente diferente.

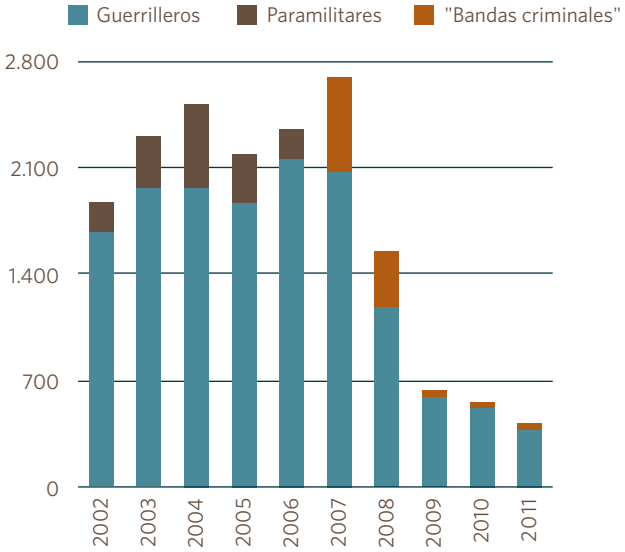
apoyado atrocidades cometidas por los paramilitares también lo hacen. Muchos oficiales de alto rango están acusados de haber sido cómplices de grupos paramilitares en su momento de mayor brutalidad. Muchos más están acusados de asesinar a más de 3.000 civiles, la mayoría en 1.500 supuestas ocasiones entre 2004 y 2008. Esto se conoce como el escándalo de los "falsos positivos", en el que los soldados se inventaban muertes en combate para obtener recompensas por lograr un alto conteo de cuerpos.

Sin embargo, los militares colombianos continúan negando la escala y seriedad —ya veces incluso la existencia— de los "falsos positivos" y otros abusos. Si bien un acuerdo que responsabilice a los oficiales a cambio de una reducción en las sentencias podría persuadir a las FARC de aceptar un estándar similar, hará falta un firme liderazgo civil para asegurar que los miembros de las políticamente poderosas fuerzas armadas lleven a cabo una serie de confesiones públicas, disculpas y juicios en tribunales civiles.

## LA OPINIÓN PÚBLICA Y LOS OPOSITORES POLÍTICOS

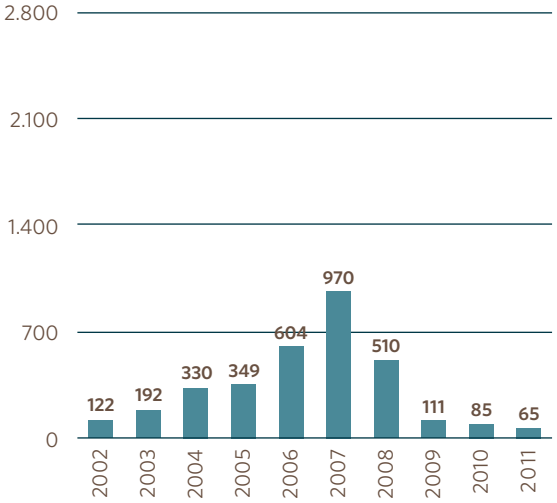
Incluso mientras negocia estas espinosas cuestiones, el proceso de paz debe seguir contando con apoyo público en Colombia. Si pierde popularidad, el riesgo es que se torne inalcanzable. En su primer año y medio, el proceso en si mismo ha gozado de considerable popularidad. Las encuestas de opinión en Colombia habitualmente muestran que entre el 55 y el 65 por ciento de los encuestados aprueban las negociaciones. Sin embargo, un porcentaje similar de los encuestados dudan que vaya a ser exitoso. Y en relación a la pregunta de si estarían de acuerdo con

*FIGURA 5: Miembros de grupos armados asesinados dados de baja por las fuerzas de seguridad colombianas, según informes, 2002-2011*




Fuente: Ministerio de Defensa de Colombia – http://bit.ly/YktB9M

*Supuestos falsos positivos que están siendo investigados/ juzgados por fiscales colombianos, 2002-2011*




Fuente: datos de la Fiscalía General de la Nación

Muchos de los miembros de grupos armados que las fuerzas armadas colombianas supuestamente mataron a mediados de la década del 2000 pueden haber sido civiles, según datos de los fiscales. Algunos de estos casos de "falsos positivos" están siendo juzgados, y cientos de soldados y algunos oficiales han sido sentenciados por tribunales civiles, aunque la mayoría de los casos siguen en las fases iniciales después de muchos años.

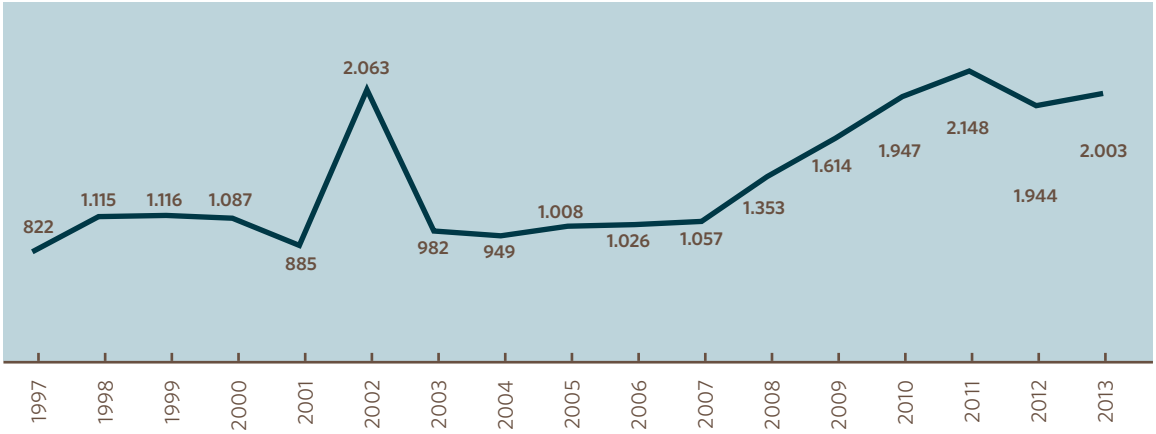
conceder amnistías a ex-miembros de las FARC, o permitirles postularse para el congreso, el porcentaje de respuestas negativas asciende al 75-80 por ciento. (Para acceder a los resultados de diversas encuestas realizadas a lo largo del proceso de paz, véase la cronología de la paz en la página web de WOLA colombiapeace.org.)

El proceso ha avanzado mucho más lentamente de lo que en un principio anunció el gobierno colombiano. Esta entrevista para la CNN fue realizada en septiembre de 2012.

Por su parte, el gobierno colombiano no siempre ha sabido manejar las expectativas. La declaración del presidente Santos de que las negociaciones concluirían en noviembre de 2013 dañó la credibilidad del proceso cuando esa fecha clave pasó y solo se habían completado dos temas de la agenda. Asimismo, la comunicación y los mensajes del gobierno colombiano han sido insulsos y apagados, mientras que las FARC y los opositores a la negociación, en especial el ex-presidente Uribe, han sabido aprovechar al máximo los medios de comunicación y las redes sociales.

La opinión pública también se ha visto afectada por la campaña electoral de cara a las elecciones legislativas de marzo de 2014 y presidenciales de mayo de 2014, en las que el presidente Santos se presenta como candidato para un segundo mandato. El presidente Santos es el único candidato presidencial

*FIGURA 6: "Acciones armadas" de las FARC en los últimos años*




Si las negociaciones fracasan, serán necesarios muchos años de conflicto sangriento para derrotar a las FARC en el campo de batalla. Este gráfico de la Fundación Paz y Reconciliación de Colombia muestra el número de acciones armadas de las FARC en los últimos años. Las guerrillas son más débiles que hace 10 años: la mayoría de sus acciones, como el sabotaje de infraestructura o la detonación de campos de minas, son de menor escala, y suceden en zonas más remotas. Pero aún son capaces de llevar a cabo varias acciones al día por todo el país, a pesar del enorme esfuerzo de las fuerzas de seguridad por impedirlo. En el campo de batalla, el conflicto definitivamente no se encuentra en la recta final.

viable que promete continuar con las negociaciones de paz. Si las FARC quieren que el proceso continúe después de mayo —y parece que así es— saben que deben continuar avanzando hacia un acuerdo, y así dar la impresión de dinamismo que se necesita para mantener una opinión pública favorable.

## III. Probables desafíos en el posconflicto

Si las negociaciones llegan a un acuerdo final, probablemente sería ratificado mediante referéndum. Incluso si el público colombiano no está de acuerdo con algunas de las concesiones otorgadas a las FARC —un grupo que, debido a su historial de abusos, está muy mal visto por la opinión pública— es probable que acepten un acuerdo que prometa apartar a las FARC de la escena después de 50 años.

Si los negociadores alcanzaran un acuerdo final, habría una explosión de optimismo. Colombia tendría mucho que celebrar. Pero el día después de que se firme el acuerdo y se tomen las fotos, el panorama se tornará más complicado que durante las negociaciones. Colombia tendrá que cumplir con algunos compromisos muy ambiciosos establecidos en los acuerdos de paz, al tiempo que desmoviliza a decenas de miles de combatientes, atiende a las víctimas y lleva al Estado a territorios históricamente sin gobierno donde existe el riesgo de que vuelva a estallar la violencia.

### IMPLEMENTAR EL ACUERDO SOBRE TIERRAS Y DESARROLLO

La pobreza rural y la distribución desigual de las tierras han sido los ejes centrales del conflicto con las FARC. Para evitar que haya más violencia en zonas rurales, y hacer frente a los niveles persistentemente elevados de pobreza en el campo, será necesario trabajar incansablemente para cumplir al pie de la letra con los compromisos alcanzados en el marco del acuerdo sobre tierras y desarrollo rural. Si bien no conocemos todos los detalles de este acuerdo, podemos asegurar que proteger y alentar a los pequeños productores que trabajan sus propias tierras exigirá enfrentarse a los intereses de ciertos grandes terratenientes acostumbrados a gozar de un poder casi absoluto a nivel local.

A pesar de su declaración de buenas intenciones, hasta ahora Bogotá ha hecho poco para enfrentarse a los intereses arraigados en zonas remotas de Colombia. Supuestamente, la Ley de Víctimas y Restitución de

Los jefes del ELN Pablo Beltrán, Ramiro Vargas, Nicolás Rodríguez Bautista, conocido como Gabino, y Antonio García, en 2011.

## Esperando al ELN

Las FARC no son el único grupo guerrillero de izquierda de Colombia. El Ejército de Liberación Nacional (ELN), también fundado en 1964, tiene entre 1.000 y 2.000 combatientes activos en algunas zonas del país. Si bien las FARC y el ELN en ocasiones han estado enfrentados, en la actualidad sus jefes parecen estar colaborando, según lo evidencian varias declaraciones conjuntas realizadas recientemente.

El gobierno colombiano ha estado discutiendo la posibilidad de llevar a cabo negociaciones con el ELN, y las guerrillas han emitido declaraciones que indican que estarían dispuestas a negociar. El gobierno de Uruguay ha ofrecido su territorio para llevar a cabo una eventual negociación.

Pero las negociaciones aún no han comenzado, y a abril de 2014, no está claro cuándo podrían hacerlo. Ninguna de las partes reconoce públicamente los motivos del retraso, pero las causas más probables son las siguientes:

- **LA CONDICIÓN PREVIA DEL GOBIERNO DE QUE EL ELN LIBERE A TODOS LOS SECUESTRADOS BAJO SU CUSTODIA.** Las FARC cumplieron con esta condición a principios de 2012. El ELN podría haber liberado a sus últimos rehenes en diciembre de 2013, pero aún no está claro si retiene a alguno más.
- **LA PROBABILIDAD DE QUE EL ELN QUIERA INCLUIR LA POLÍTICA MINERA Y ENERGÉTICA DE COLOMBIA EN LA AGENDA DE NEGOCIACIÓN.** Si bien esto no forma parte de las negociaciones con las FARC en La Habana, el ELN lleva mucho tiempo reclamando una mayor participación del estado en estas industrias, y ha tenido un papel dominante en la región petrolera de Arauca. No obstante, hoy en día estas industrias generan la mayor parte de los ingresos por exportación del país, y el gobierno es reacio a acordar cambios.
- **LA PROBABILIDAD DE QUE EL ELN INSISTA EN UN CESE DE FUEGO BILATERAL MIENTRAS SE LLEVAN A CABO LAS NEGOCIACIONES,** una condición que el gobierno no concedió a las FARC.
- **LA EXIGENCIA DEL ELN DE QUE LA SOCIEDAD CIVIL SEA INCLUIDA EN LAS NEGOCIACIONES.** Esta es una exigencia de larga data, pero no está claro cómo llevarla a cabo, o incluso quiénes constituyen la "sociedad civil".
- **EL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES DEL ELN.** Se cree que el grupo, considerado menos jerárquico que las FARC, toma decisiones por consenso. Construir consenso entre jefes que se encuentran muy lejos los unos de los otros, y un comando central de cinco miembros, especialmente sobre una cuestión como si se debe negociar o no, puede llevar mucho tiempo.
- **LA RELACIÓN CON LAS NEGOCIACIONES CON LAS FARC.** Dado que las negociaciones con las FARC se encuentran en una fase muy avanzada, es improbable que el ELN se incorpore al proceso de La Habana. En negociaciones separadas, el ELN seguramente tendría que ratificar, más que replantear, lo acordado en La Habana.

Negociar con el ELN es un proceso complejo y lento, pero necesario. Si Colombia llega a un acuerdo con las FARC mientras el ELN permanece activo, el grupo de menor envergadura podría crecer rápidamente a medida que absorbe a miles de jefes y combatientes disidentes de las FARC, y será muy difícil lograr la paz.

Manifestación a favor de la paz en abril de 2013. Foto de la Alcaldía de Bogotá.

Tierras de 2011 devolvería tierras a hasta 200.000 campesinos y sus familias en Colombia. No obstante, Colombia apenas ha avanzado en este objetivo, como han observado el Grupo de Trabajo sobre América Latina (LAWG, por sus siglos en inglés), Human Rights Watch y otros periodistas e investigadores. Hasta el momento, la iniciativa de restitución de tierras ha sido otro ejemplo de la brecha entre las buenas intenciones en Bogotá y la voluntad de hacer frente al poder local en otras regiones del país. Esta persistente brecha sería preocupante si Colombia se enfrenta a desafíos similares a la hora de implementar el acuerdo sobre tierras y desarrollo rural.

## DESARME, DESMOVILIZACIÓN Y REINTEGRACIÓN

Los negociadores de las FARC se han mostrado algo reacios a entregar las armas tras firmar un acuerdo de paz. Aún así, el desarme—o de algún modo dejar las armas "fuera de uso," como sucedió en Irlanda del Norte—junto con alguna forma de desmovilización, serán sin duda condiciones inamovibles del gobierno colombiano para terminar la guerra. Tras las desmovilizaciones colectivas, Colombia tendrá que lidiar con una ola de ex-combatientes, la mayoría de los cuales no tendrán apenas educación ni habilidades productivas, y entre los cuales habrá graves casos de estrés post-traumático.

Esta no sería la primera vez que Colombia se enfrenta a una ola así. Entre las desmovilizaciones de paramilitares en el marco del Proceso de Justicia y Paz y los miembros de la guerrilla que se han desmovilizado individualmente, a razón de más de mil por año, Colombia ha tenido que reintegrar a

En este mapa de la Unidad de Restitución de Tierras del gobierno colombiano, las municipalidades que se muestran en colores más oscuros tienen un mayor número de tierras abandonadas o confiscadas a la fuerza como resultado del conflicto armado. El abandono y el despojo de tierras son fenómenos generalizados en toda la geografía nacional.

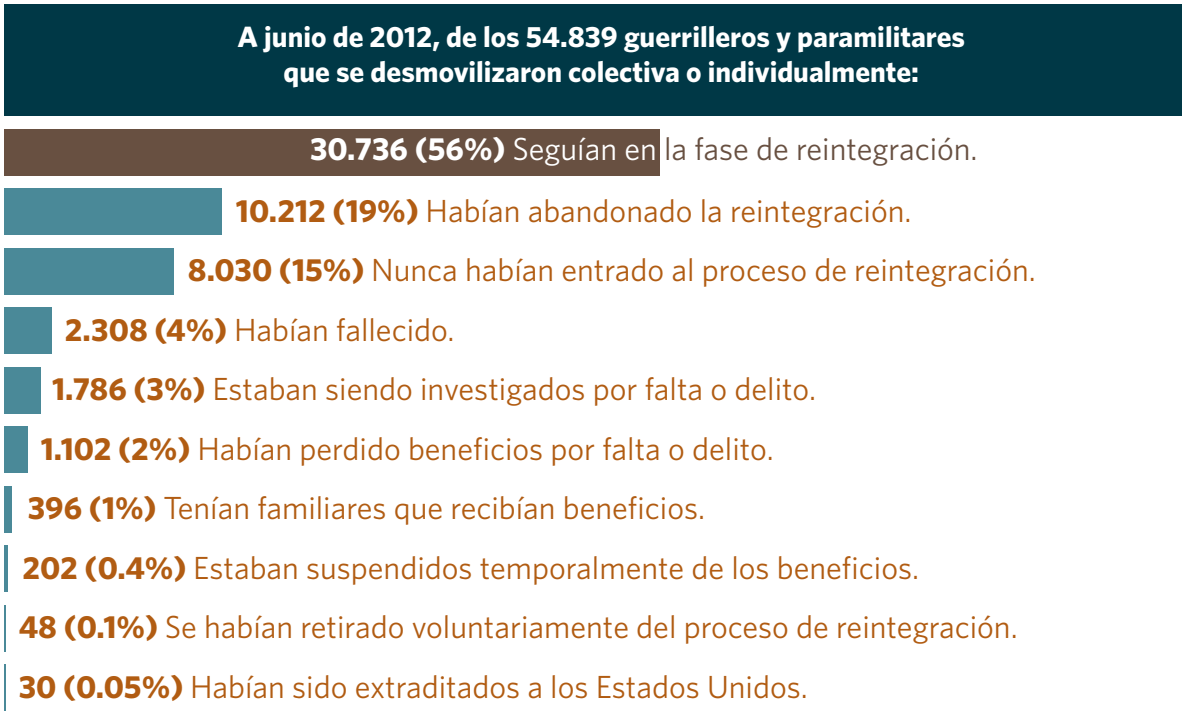
La detonación de una moto bomba en el municipio de Pradera, en el suroeste del país, el 16 de enero de 2014, el día después del fin de una tregua de 30 días con las FARC, generó cuestionamientos acerca del mando y control de las guerrillas y el compromiso de los mandos medios con el proceso. Los negociadores de las FARC en La Habana negaron saber nada sobre el atentado, en el que murió una persona y resultaron heridas 56, y posteriormente los jefes del grupo lo "repudiaron y condenaron."

más de 55.000 miembros de grupos armados desde 2002, con resultados variables. Se ha aprendido mucho desde los primeros años de dos estipendios anuales, mantenimiento inadecuado de registros, y bajos presupuestos. La Agencia Colombiana para la Reintegración ahora ofrece a los ex-combatientes capacitación laboral, apoyo psicosocial y educación básica durante un periodo más largo. Aún así, muchos de ellos quedan fuera del sistema, generando nueva violencia cuando caen de nuevo en la delincuencia.

Los programas de desmovilización y reintegración de Colombia han sido más exitosos que los de la mayoría de los otros países, pero aún así una gran parte de los desmovilizados se ha quedado fuera del sistema. Una futura reintegración de ex-combatientes de las FARC deberá mantener una tasa de participación mucho más alta.

Tras firmar un acuerdo con las FARC, la máxima prioridad de Colombia y los donantes internacionales deberá ser evitar que los mandos medios de las FARC opten por no desmovilizarse. Tras décadas en la selva, es probable que los altos mandos de las FARC permanezcan desmovilizados, involucrándose en la política o simplemente retirándose. Los combatientes rasos de las FARC, muchos de los cuales son menores de edad, seguramente aprovecharán las oportunidades de educación y capacitación que ofrecen los programas de reintegración. Los ex-guerrilleros más problemáticos serán aquellos que hayan tenido un puesto de mando medio o hayan participado en la

*FIGURA 7: Desmovilización y reintegración, 2003 – junio 2013*



recaudación de fondos, especialmente en zonas en las que las FARC controlan fuentes de ingreso ilegal, como el narcotráfico, la minería no autorizada o la extorsión.

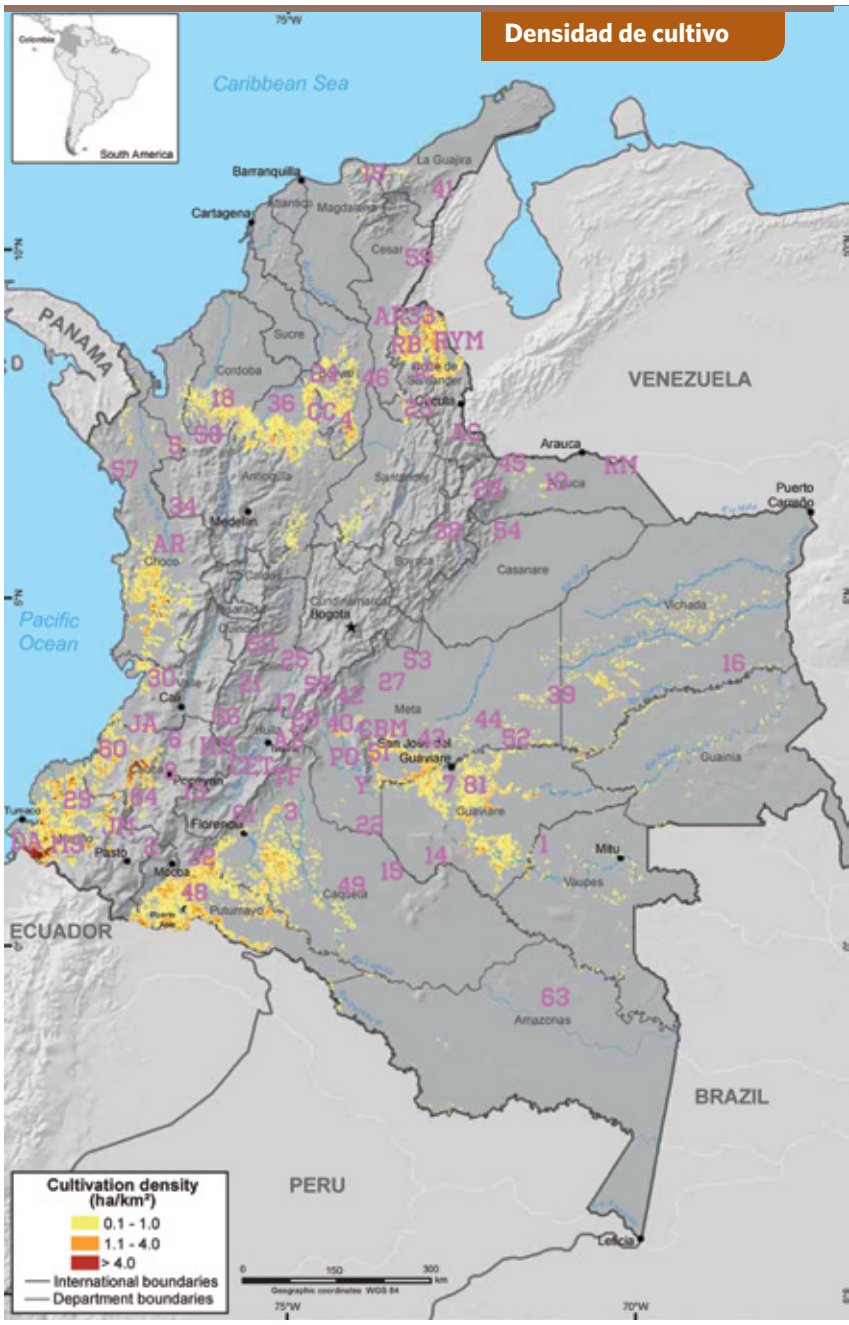
Estos individuos se desmovilizarían con una importante ventaja en el hampa criminal, al controlar los corredores más importantes del tráfico y gozar de amplios contactos en el mundo criminal. Son quienes están a más riesgo de volver a sus zonas de operaciones, rearmarse y generar nueva violencia al frente de bandas criminales emergentes. Estos grupos podrán no autodenominarse FARC, pero en su pugna por territorios e ingresos ilícitos, podrían ser igual o más violentos que éstas.

Será necesario un gran esfuerzo para mejorar la seguridad y la gobernabilidad en zonas en las que el tráfico es rentable, la presencia del Estado es débil, y predominan los grupos armados. Se supone que en el momento inmediatamente posterior a un acuerdo de paz el gobierno podría entrar a estos territorios y establecerse con la mínima resistencia violenta. Pero aún así, cualquier esfuerzo por llenar los vacíos existentes en materia de gobernabilidad territorial exigirá en primer lugar tener en claro los roles militares y policiales, y en segundo lugar comprometerse con garantizar que la presencia del Estado resultante sea mayoritariamente civil. No basta simplemente con desplegar soldados en territorios que antes eran controlados por las FARC.

Colombia ya presenció este fenómeno tras la desmovilización de los grupos paramilitares entre 2003 y 2006. Muchos mandos medios paramilitares volvieron al negocio de la droga de inmediato, esta vez al frente de pequeños ejércitos que continúan controlando regiones enteras mediante la corrupción y la intimidación. Estas bandas criminales, o BACRIM, como las denominan las fuerzas de seguridad colombianas, podrían unir fuerzas con estructuras lideradas por ex-mandos medios de las FARC (a las que algunos analistas se refieren como FARCRIM), para formar la nueva cara del narcotráfico y el conflicto armado en Colombia después de las FARC.

## LA GOBERNABILIDAD EN ÁREAS SIN GOBIERNO

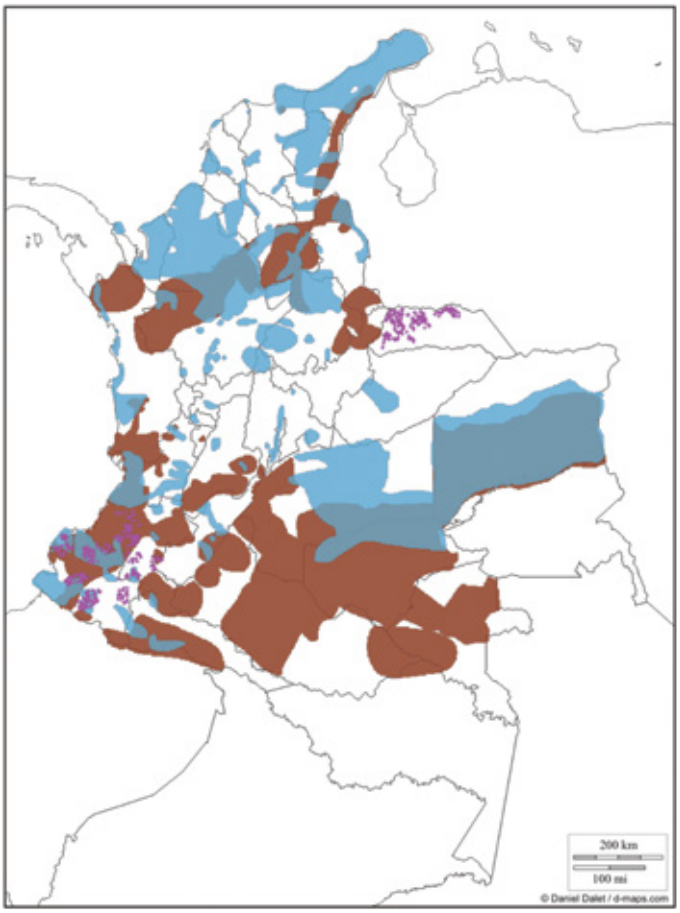
De hecho, incluso si el acuerdo incluye a los civiles, no basta simplemente con introducir la presencia del Estado en zonas históricamente violentas y sin gobierno. Estos territorios no son pizarras en blanco. Tienen gobiernos locales, asociaciones de productores,




Fuente: El Tiempo (Colombia) - http://bit.ly/Znb9sN

Esta imagen yuxtapone el mapa de frentes de las FARC de 2013 de la Fundación Paz y Reconciliación, con el mapa del cultivo de coca de 2012 de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Muestra muchos frentes de las FARC activos en zonas de producción de coca, y algunos otros frentes operativos en lucrativos corredores del tráfico, como costas ribereñas y marítimas, y zonas fronterizas. Si los jefes de las FARC firman un acuerdo, no será fácil convencer a los miembros de estos frentes de que dejen atrás este fuente de ingresos y se desmovilicen.

**Presencia estimada de grupos armados (2012)**




Las bandas criminales con raíces en los grupos paramilitares que existieron entre la década de 1980 y la década del 2000, como los Urabeños y los Rastrojos, están activas en al menos tantos territorios como las FARC.

FARC

BACRIM ("nuevos paramilitares")

ELN

reservas y organizaciones afrocolombianas e indígenas, grupos de víctimas y otras estructuras similares de la sociedad civil. Toda iniciativa para mejorar la gobernabilidad después del conflicto deberá trabajar muy de cerca con estas organizaciones, haciendo de su fortalecimiento su eje central. Las experiencias que han combinado el desarrollo económico con la consolidación de la paz y el fortalecimiento de la sociedad civil, como el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, en el centro-norte de Colombia, son muy aleccionadoras.

La consolidación de la paz y la gobernabilidad en zonas históricamente conflictivas no se puede imponer desde arriba. En áreas en las que nunca ha existido un gobierno, la credibilidad del estado dependerá no solo de los recursos que emplea, sino también de su voluntad de escuchar y compartir la responsabilidad con la sociedad civil.

## IV. La participación de Estados Unidos en el posconflicto

Ayudar a Colombia a afrontar estos desafíos posteriores al conflicto será costoso y por momentos frustrante, pero es absolutamente necesario. Funcionarios estadounidenses como el Secretario de Estado John Kerry y el administrador de USAID Rajiv Shah han manifestado su voluntad de apoyar generosamente a Colombia durante esta fase. En sus declaraciones no han dado detalles de los planes de Estados Unidos, lo cual no es sorprendente, dado que todavía no se conocen los contenidos de los acuerdos de paz.

Aún así, los programas de ayuda de Estados Unidos a menudo avanzan lentamente, y está llegando el momento de comenzar a planificar la ayuda posconflicto. Sobre todo, los responsables del presupuesto deben prepararse para proporcionar a Colombia los mismos, o mayores niveles de ayuda que ha estado recibiendo desde mediados de la década del 2000. Tan pronto como se firme un acuerdo de paz, habría que eliminar, y revertir, la reducción paulatina del 10 al 15 por ciento anual en la ayuda a Colombia de los últimos años.

Esta ayuda renovada podría destinarse a una larga lista de prioridades, varias de las cuales se analizan en este informe, entre las que se incluyen costosas iniciativas como llevar la presencia del Estado a áreas sin gobierno; desmovilizar y reintegrar a los combatientes; facilitar el retorno de las poblaciones desplazadas; proteger a los defensores de derechos humanos; ayudar al cumplimiento de los acuerdos sobre tierras, participación política y víctimas; apoyar la creación de mecanismos de justicia transicional y una comisión de la verdad; y apoyar los esfuerzos internacionales de verificación y monitoreo, en cualquiera de sus formas.

La ayuda militar posconflicto es mucho menos prioritaria para un país que ya invierte US$14.000 millones al año en su propio sector de defensa. Sin embargo, Estados Unidos puede jugar un papel importante facilitando la transición de los militares hacia la situación posconflicto en Colombia. El éxito del

El Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, una iniciativa no-gubernamental financiada principalmente por donantes internacionales, logró considerables resultados en una región muy conflictiva de Colombia mediante la combinación de esfuerzos de consolidación de la paz y proyectos de desarrollo económico participativo. La experiencia del Magdalena Medio ofrece lecciones para los esfuerzos por mejorar la gobernabilidad tras el conflicto a lo largo del país.

## Proyectos Estratégicos Territoriales del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio

**1. FOMENTAR LA CONSOLIDACIÓN DE LA PAZ A NIVEL LOCAL**

- Promover los derechos humanos y acompañar a las organizaciones de víctimas y los defensores de los derechos humanos y los derechos sobre la tierra; promover la salud sexual y reproductiva
- Apoyar las iniciativas territoriales de paz

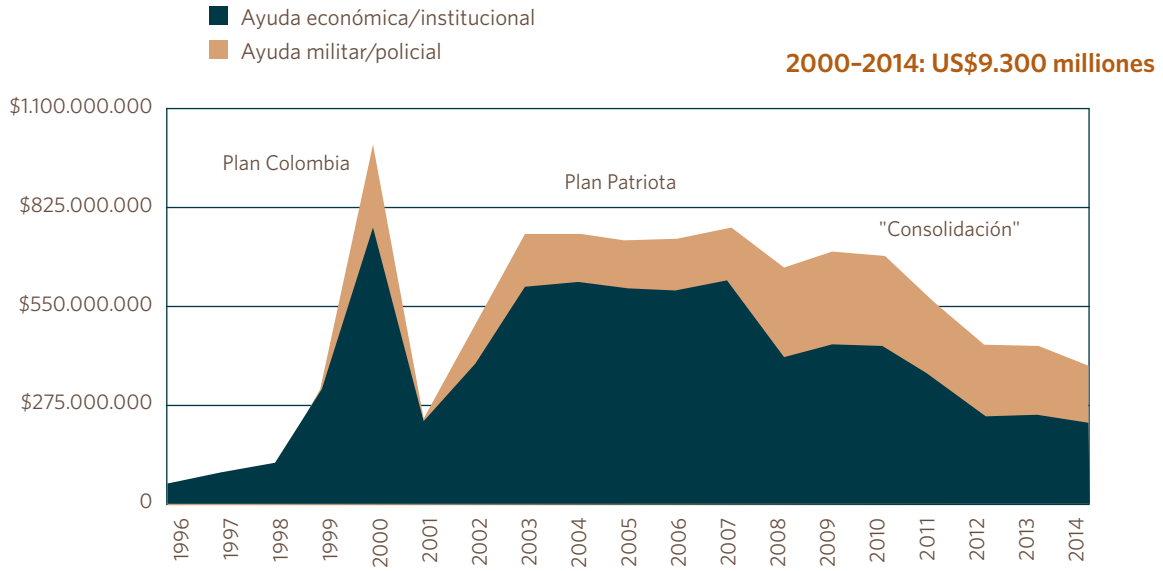
**2. PROMOVER LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA**

- Fortalecer y promover la apertura de las instituciones civiles de gobierno
- Fortalecer los movimientos sociales, especialmente los movimientos de mujeres
- Mejorar la educación y las actividades culturales
- Adoptar una estrategia de comunicación

**3. PROMOVER UNA ECONOMÍA LOCAL FUERTE Y JUSTA**

- Proyectos productivos para pequeños agricultores, integrados a las organizaciones de productores
- Seguridad alimentaria y nutrición
- Protección del medioambiente
- Mecanismos de resolución de conflictos por los recursos
- Industria a pequeña escala, agroindustria y microcrédito

## *FIGURA 8: Ayuda de EE.UU a Colombia*




Fuente: www.justf.org/Country?country=Colombia.

Si bien no todas las agencias o instituciones aquí descritas tienen poder de veto, la oposición concertada de una o más de ellas, junto con la falta de un fuerte liderazgo al más alto nivel, podría paralizar la ayuda de Estados Unidos al proceso de paz en Colombia.

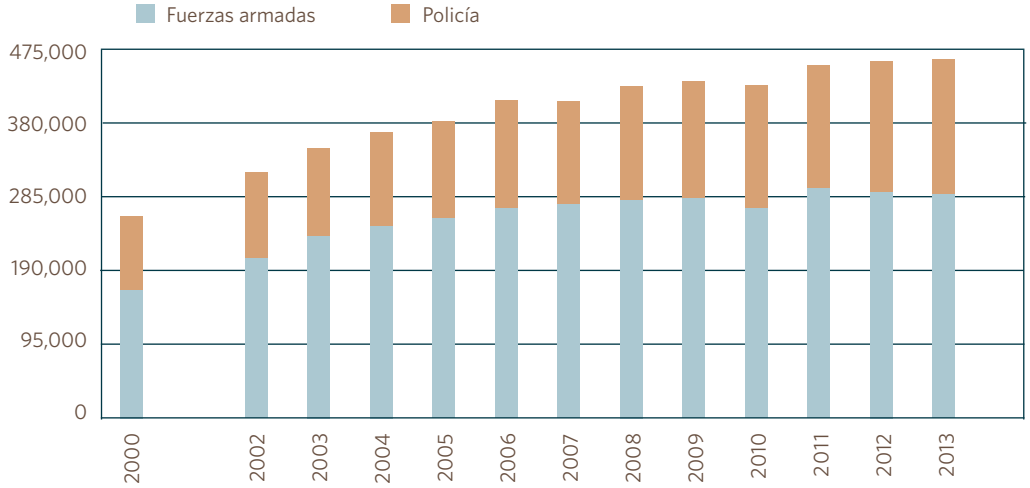
acuerdo de paz podría significar el fin de la que ha sido la principal misión de las fuerzas armadas Colombianas en los últimos 50 años. Las segundas fuerzas armadas de mayor tamaño de América Latina (y el mayor ejército) se verán presionadas—por la comunidad de negocios que paga impuestos en el país, entre otros—para que reduzcan su envergadura y presupuesto. Con el crimen organizado y la delincuencia común como la principal amenaza a la seguridad, la atención y los recursos podrían pasar de las fuerzas armadas a la policía y el sistema de justicia. La Policía Nacional de Colombia incluso podría moverse del Ministerio de Defensa a un nuevo ministerio de seguridad pública, como ha ocurrido en casi todos los demás países latinoamericanos desde los años 80.

## AYUDAR A LOS MILITARES COLOMBIANOS A ADAPTARSE

Estos ajustes serán difíciles para los poderosos militares colombianos. Es posible que la institución se resista a ellos de maneras que compliquen la implementación del acuerdo de paz. Las relaciones cívico-militares en el país podrían entrar en una fase de crisis aguda si la paz amenaza las viejas prerrogativas militares. Es precisamente en esos momentos cuando Estados Unidos podría aprovechar sus profundos vínculos con las fuerzas armadas colombianas para facilitar estas difíciles transiciones.

En ocasiones, en los últimos años, los responsables de formular políticas en Estados Unidos han permitido que su análisis de Colombia se vea influido por sus contrapartes militares colombianas, en gran medida pro-Estados Unidos, en especial en lo relativo a los derechos humanos. Esto no puede suceder en el periodo posterior al conflicto. En lugar de defender las prioridades militares, en sus relaciones con sus contrapartes en las fuerzas armadas colombianas tras el conflicto, los funcionarios de defensa y diplomáticos deberán alentar el profesionalismo y la primacía de las

*FIGURA 9: Las fuerzas de seguridad colombianas*




Fuente: Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, 2002-2012. Ministerio de Defensa de Colombia (http://bit.ly/YktB9M).

decisiones de las autoridades civiles electas.

## APOYAR LA VERIFICACIÓN INTERNACIONAL Y EL MONITOREO

Finalmente, además de proporcionar ayuda y asesoramiento a Colombia, Estados Unidos podría jugar un papel central a la hora de orientar el apoyo de la comunidad internacional tras el conflicto. Entre otras cosas, podría financiar generosamente una presencia internacional de verificación y monitoreo con un fuerte mandato. No ofrecemos ninguna recomendación acerca de qué organización en concreto debería estar a cargo de esta misión o presencia. La ONU es el organismo con más experiencia en este tipo de misiones. La Organización de Estados Americanos (OEA), que aún mantiene una misión de verificación establecida durante las desmovilizaciones paramilitares, cuenta con mucha más infraestructura y presencia en zonas remotas en las que la implementación del acuerdo de paz presentará los mayores desafíos.

## AYUDAR A COORDINAR A LOS DONANTES INTERNACIONALES

Estados Unidos también puede ayudar a orientar la ayuda posconflicto de la comunidad internacional a Colombia apoyando la coordinación entre naciones donantes. Los recursos son demasiado escasos para duplicar esfuerzos, y una división del trabajo cuidadosamente planificada podría ayudar a asegurar que todas las necesidades urgentes sean cubiertas. Los funcionarios estadounidenses deberían apoyar, y si fuera necesario también organizar, conferencias y otros mecanismos que favorezcan una comunicación y coordinación fluida, eficiente y eficaz entre donantes.

Estas conversaciones y planes deberían comenzar de inmediato, ya que este proceso de paz parece cada vez más real. El apoyo al posconflicto en Colombia deberá comenzar en cuanto se firme un acuerdo. En un contexto en el cual el delito y la gobernabilidad débil amenazan constantemente con disparar nuevas formas de violencia y conflicto, cualquier retraso podría ser desastroso.

Colombia y sus aliados internacionales deberán estar dispuestos a trabajar desde el primer día. A fin de poder comenzar rápidamente, la planificación para el periodo posconflicto debe comenzar ahora, aún cuando el éxito de las negociaciones no esté asegurado. La conversación sobre cómo ayudar comienza ahora.

### Qué podría hacer una misión de verificación internacional y monitoreo

- Arbitrar el cumplimiento de los compromisos del acuerdo de paz.
- Gestionar y verificar la desmovilización de los combatientes.
- Ofrecer asesoramiento y asistencia técnica a los programas de reintegración.
- Supervisar la creación de una comisión de la verdad, tribunales de justicia transicional, y en caso de que sea necesario, instalaciones penitenciarias donde los responsables de las peores violaciones de los derechos humanos puedan cumplir penas de privación de libertad.
- Ofrecer asesoramiento y asistencia técnica para cumplir con los acuerdos sobre desarrollo rural, participación política, política antidroga y víctimas.
- Ayudar el retorno de las personas desplazadas.
- Ayudar a las fuerzas de seguridad en la transición posconflicto.
- Acompañar a las organizaciones de víctimas, personas desplazadas, mujeres, defensores de los derechos sobre la tierra, defensores de los derechos humanos, personas indígenas, grupos afrocolombianos, trabajo, y otras.
- Servir de foro de coordinación de donantes internacionales, con el fin de evitar la duplicación de esfuerzos.

### Los vecinos de Colombia (Brasil, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela) pueden ayudar a consolidar la paz de las siguientes formas:

- Manifestando públicamente y a menudo su solidaridad y apoyo a las negociaciones en curso.
- Mejorando la seguridad pública en zonas fronterizas, transformándolas en zonas hostiles a posibles grupos saboteadores colombianos.
- Tomando medidas para reducir el tráfico de armas hacia Colombia por parte de grupos armados o saboteadores a través de su territorio, o el tráfico de drogas desde Colombia a través de su territorio, incluida la sanción de los oficiales corruptos que ayuden o colaboren con dichas actividades.
- Facilitando el retorno de refugiados colombianos tras el conflicto.

## Acerca de WOLA

Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) promueve los derechos humanos, la democracia y la justicia socioeconómica en América Latina y el Caribe. Fundada en 1974, WOLA juega un papel clave en los debates políticos sobre Latinoamérica en Washington. WOLA facilita el diálogo entre actores gubernamentales y no gubernamentales, analiza el impacto de las políticas y los programas de gobiernos y organizaciones internacionales, y fomenta alternativas mediante la publicación de informes, campañas de educación y la incidencia política.

## Para solicitar más publicaciones de WOLA

WOLA cuenta con una amplia gama de publicaciones disponibles sobre derechos humanos en América Latina y la política estadounidense. Visite nuestro sitio web para obtener una lista completa de publicaciones. Por favor no dude en comunicarse con nuestra oficina para solicitar copias de las publicaciones más antiguas.

## Para ponerse en contacto con nosotros

Oficina en Washington para Asuntos Latinamericanos (WOLA)
1666 Connecticut Avenue NW | Suite 400 | Washington DC 20009
Teléfono: 202.797.2171 | facsimile: 202.797.2172
Correo electrónico: wola@wola.org | Página web: www.wola.org

## Reconocimientos

WOLA agradece al Reino de Noruega por su generoso apoyo, que hizo posible esta publicación.

**Este informe fue escrito** por Adam Isacson, coordinador del programa sobre seguridad regional de WOLA. Ha estudiado el conflicto colombiano desde 1997.

ISBN: 978-0-9859307-1-4